TEXTOS EDITORIALES DE LA REVISTA "ECCLESIA"

Con fecha de 26 de febrero ha sido promulgada la nueva ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media. Al anunciarse el propósito del Ministro de Educación Nacional de proponer, y previos los trámites legales implantar a su tiempo una nueva ley de Enseñanza Media, *Ecclesia*, en un editorial de 8 de diciembre de 1951, hizo resaltar la grandísima importancia de las escuelas medias en una nación, siendo las que más influyen en el nivel intelectual de un pueblo si son lo que deben ser, y también las que más eficazmente contribuyen a la formación moral si no se desentienden de la misma, antes bien la consideran un fin esencial de las mismas.

Tratándose de España, *Ecclesia*, inhibiéndose de cuestiones técnicas, propias más bien de revistas de especialización pedagógica, y atendiendo a los derechos de la Iglesia en la enseñanza, propugnó desde el primer momento tres condiciones que debía tener la nueva ley que se formulase: primera, que, fiel a los compromisos contraídos por el Gobierno español en sus convenios de 1941 y 1946 con la Santa Sede, no dictase la nueva ley sin ponerse de acuerdo con la misma; segunda, que se reconociese el derecho de la Iglesia a fundar escuelas medias como en las leyes de educación primaria y de ordenación universitaria, distinguiéndolas de las escuelas privadas; tercera, que se salvase la igualdad entre los centros oficiales y los de la Iglesia dentro de cada uno de los grados de enseñanza.

El Gobierno español ha cumplido fielmente desde el principio sus compromisos y envió con diligencia directamente a la Santa Sede el anteproyecto de la ley, el proyecto que se proponía someter a las Cortes y, por último, las mo-

dificaciones propuestas por la ponencia de la Comisión de Enseñanza de las mismas en los artículos que decían referencia con los centros o colegios de la Iglesia. Conviene fijarse bien en que el compromiso del Gobierno era ponerse de acuerdo con la Santa Sede por tratarse de causa mayor, no con el Episcopado español ni menos todavía con los colegios de la Iglesia. La Santa Sede hubiese podido llevar directamente las negociaciones con el Gobierno; sin embargo, en su altísima prudencia, ordenó a la Conferencia de Metropolitanos, organismo representativo el más autorizado de la Jerarquía eclesiástica española, que estudiase el proyecto y procurase que quedasen salvaguardados los derechos de la Iglesia mediante las oportunas negociaciones con el Gobierno, pero reservándose siempre la Santa Sede la decisión definitiva en este importante asunto.

A algunos ha extrañado que después del editorial de 8 de diciembre de 1951, en que tanta importancia se reconocía al asunto de una nueva ley de Enseñanza Media, *Ecclesia* se haya abstenido de tratar esta cuestión durante la gestación del proyecto de la nueva ley. La explicación del criterio adoptado por *Ecclesia* es bien sencilla. En el aludido editorial se decía: "No siendo *Ecclesia* una revista de especialización pedagógica, no le compete discutir temas ni fórmulas de carácter técnico que no son dogmas." A *Ecclesia* le tocaba sólo defender los derechos de la Iglesia en esta cuestión; pero desde el momento en que cumpliendo el Gobierno con sus compromisos había entablado negociaciones con la Santa Sede, entendió *Ecclesia* que debía aguardar el resultado de las mismas, pues, como luego ha expuesto la Conferencia de Metropolitanos en su autorizada instrucción El apostolado de la educación y los derechos en ella de la Iglesia, la historia de los concordatos y el mismo concordato de Letrán muestran cuán grande es el espíritu de concordia y de benevolencia de la Iglesia, no urgiendo con todo rigor los derechos de la misma para sus escuelas, sino conviniendo con el Estado, según las circunstancias de lugar y tiempo, "en un ambiente de concordia y armonía". A la Iglesia jerárquica, a la Santa Sede en último término, es a quien compete determinar en cada momento qué derechos suyos y en qué grado y medida debe urgir. Los demás no deben pretender dic-

Transcribimos de la revista *Ecclesia* (números del 7 y 28 de marzo) el autorizado editorial "La Nueva Ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media", la carta que don José Pemartín dirigió a dicha revista y la "Nota de la Redacción" de ésta. Consideramos, como ya se indicó en la presentación que encabeza este número, que estas importantes manifestaciones ponen definitiva claridad en la polémica últimamente suscitada en torno al estatuto jurídico de los centros docentes.

tar a la Jerarquía o a la Santa Sede lo que debe hacer, sino regirse por su juicio. En este punto se debe seguir fielmente la regla décimotercera que para sentir con la Iglesia dió el gran maestro de espíritu San Ignacio de Loyola «Debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo creer que es negro si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo Nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dió los diez mandamientos es regido y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia».

Y ciertamente, la Conferencia de Metropolitanos, para corresponder a la confianza de la Santa Sede, no perdonó trabajos celebrando dos largas y detenidas reuniones: una en Madrid, en el mes de abril, y otra en Barcelona, durante el Congreso Eucarístico Internacional, dedicadas exclusivamente al estudio del anteproyecto de la ley. De la eficacia de la intervención de la Conferencia de Metropolitanos y de sus laboriosas pero cordiales negociaciones con el Gobierno son testimonio irrecusable las modificaciones introducidas en el anteproyecto de ley. Mas toda negociación, aun la más cordial, es siempre a base de mutuas transacciones. Sin que el Gobierno hubiese aceptado algunos puntos considerados esenciales por la Conferencia de Metropolitanos no habría habido acuerdo. A trueque de llegar a él, la Conferencia de Metropolitanos dejó de insistir en otros puntos y se elevó la «redacción definitiva de los artículos del anteproyecto de ley de Enseñanza Media, que fueron examinados por la Conferencia de Metropolitanos en sus reuniones de Madrid y Barcelona», a la Santa Sede. Esta, por medio de la Secretaría del Estado, comunicó, tanto al Gobierno español como a la Conferencia de Metropolitanos, que aun cuando el proyecto no era del todo satisfactorio, no entendía poner dificultades, con tal que el texto de la ley de enseñanza estuviese conforme con el texto que se le había enviado. Así lo hizo público la Conferencia de Metropolitanos en su instrucción de 29 de septiembre último.

En el terreno canónico hay que distinguir entre un concordato y una ley civil que necesita la aquiescencia de la Santa Sede respecto de determinados puntos. Un concordato es una ley emanada de las dos supremas potestades, Iglesia y Estado, hecha, por lo tanto, de acuerdo por ambas. Mas la necesidad, aun nacida de un compromiso, de obtener el asentimiento de la Santa Sede respecto de ciertos puntos de una ley civil, no requiere una aprobación positiva por parte de la Santa Sede de toda la ley ni aun de ciertos puntos de ella; basta que la admita, que no presente dificultades a la misma. Esto es lo ocurrido con el proyecto de ley de ordenación de la Enseñanza Media y, por tanto, no sería exacto hablar de aprobación positiva; mas sí se puede hablar de aceptación de la ley, y

sería temeraria presunción ofensiva a la Jerarquía eclesiástica y a la Santa Sede atreverse a afirmar que ni una ni otra hubiesen defendido debidamente los derechos de la Iglesia, habida razón de todas las circunstancias.

La luminosa instrucción de la Conferencia de Metropolitanos cumplió una doble importante finalidad. Primeramente expuso doctrinalmente ante todos los fieles españoles los derechos de la Iglesia en la educación, y es que los que tienen en la enseñanza, en la fundación de escuelas de todos los grados se fundamentan en los derechos incommovibles que tiene la educación. Cuán poca ilustración en estas materias de derecho público eclesiástico tengan aún muchos españoles de profesiones intelectuales puede colegirse de los graves errores que se han escrito en estos meses en que se han tratado con apasionamiento los temas de enseñanza. Muy recientemente en una revista profesional se defendía que «ni en el Evangelio ni por revelación se expresa un derecho eclesiástico a la enseñanza profesional de la Iglesia». Se comprendería esta afirmación en un protestante, para quien sólo la Sagrada Escritura, libremente interpretada, es criterio y norma religiosa, pero ciertamente no se comprende cómo puede surgir de la pluma de quien hace afirmaciones de catolicismo, pero ignora el Magisterio de la Iglesia, que en la encíclica de Pío XI «*Divini illius Magistri*» defiende este derecho de la misma e ignora el Código de Derecho Canónico (y en las leyes universales de la Iglesia no cabe error), que en su canon 1.375 establece: «*Ecclesiae est in scholas cuiusvis disciplinae non solum elementarias, sed etiam medias et superiores condendi.*»

En segundo lugar, en el momento en que se presentaba a las Cortes el proyecto definitivo de la ley de ordenación de la Enseñanza Media, la Conferencia de Metropolitanos expuso públicamente con toda claridad cuál era el *mínimum* convenido entre la Iglesia y el Estado respecto de la nueva ley para salvaguardar los derechos de la Iglesia, citando los artículos sobre los cuales había habido convenio e inhibiéndose respecto de los demás y, en su consecuencia, dejando a los católicos en completa libertad respecto de los artículos de la ley que no habían sido objeto de negociaciones entre la Iglesia y el Gobierno, como también respecto de procurar mejorar con la moderación y respetos debidos y por medios legales el *mínimum* de condiciones convenidas.

Es muy digno de notar y alabar el respeto que en las Cortes se ha guardado a la instrucción de la Conferencia de Metropolitanos y, en su consecuencia, el *mínimum* convenido entre la Iglesia y el Gobierno, lo mismo por parte de la ponencia al dictaminar sobre el proyecto de ley presentado, como en la Comisión de Educación Nacional como, por fin, en el pleno de las Cortes. Es más: al proponer la ponencia algunas enmiendas a algunos de los artículos convenidos

(las más, simples retoques de estilo o de más precisa expresión), el Gobierno, cumpliendo con toda lealtad sus compromisos con la Santa Sede, comunicó tales enmiendas a la misma, la cual, antes de dar su asentimiento, quiso también que dictaminase la Conferencia de Metropolitanos, aceptando plenamente la Secretaría de Estado tal dictamen, en el cual se proponían algunas mejoras en los artículos que se modificaban, enmiendas que, tanto la ponencia como el Gobierno, aceptaron. Por ello, en las Cortes, pudo el señor Rodríguez de Valcárcel, al defender el dictamen de la Comisión de Educación Nacional, decir, citando palabras de una carta del Cardenal Primado al ministro de Educación Nacional, que se había llegado a un completo acuerdo, completo acuerdo que se refería a las enmiendas propuestas por la ponencia de la Comisión de Educación Nacional y las mejoras solicitadas, a su vez, por la Conferencia de Metropolitanos. Es muy de notar que la ponencia de la Comisión de Educación Nacional atendió plenamente la observación que la instrucción de la Conferencia de Metropolitanos había hecho respecto del art. 117 del proyecto (en la ley promulgada tiene el núm. 116), al cual no había prestado en su redacción conformidad la Conferencia de Metropolitanos por entender, en cuanto a las becas, que si se cargaban a los colegios no estatales, era un gravamen económico para los mismos, y si se imponían nominalmente los becarios, era un peligro para la disciplina escolar, quedando redactado en la ley definitivamente aprobada en la siguiente forma: «Todos los centros de Enseñanza Media, oficiales y no oficiales, deberán reservar en sus residencias o internados un 10 por 100 de la totalidad de sus plazas con destino a alumnos beneficiarios de becas costeadas por organismos oficiales. En la selección nominal de los becarios se procederá de acuerdo con la dirección de los respectivos centros. Los centros no oficiales podrán optar por proponer al Ministerio de Educación Nacional el cumplimiento de esta obligación mediante becas costeadas por el propio centro en las condiciones y según las normas especiales que al efecto se dicten.»

Creemos que Ecclesia no puede hurtar la manifestación de su criterio, no respecto de cuestiones pedagógicas discutibles o respecto de la organización del profesorado oficial, sino respecto del reconocimiento de los derechos de la Iglesia comparando la legislación anterior a la ley de Bases de 1938, esta ley y la ley de ordenación de la Enseñanza Media que acaba de promulgarse.

La legislación española sobre Enseñanza Media anterior a la ley de Bases de 1938, aun cuando admite las escuelas medias privadas (y en ellas incluye a los centros docentes de la Iglesia), las sujeta a los institutos oficiales de segunda enseñanza, predominando en todo el siglo XIX y principios del presente la tendencia

estatificadora y centralizadora. La primera República española trató de establecer, al menos teóricamente, la libertad de enseñanza. En cambio, la segunda República española, laicista y persecutoria, suprimió la religión en los planes de estudio de todos los grados docentes; en la ley llamada de confesiones y congregaciones religiosas prohibió a estas últimas tener colegios de enseñanza, y por el decreto de 26 de junio de 1934 acabó con toda independencia y autonomía de los colegios. Algunos elementos, al tratarse de promulgar una nueva ley de Enseñanza Media, hubiesen pretendido volver a la completa sujeción de los colegios privados y de la Iglesia a los institutos oficiales del Estado, no advirtiendo que esta orientación, importada de Francia en España, ha sido ya desechada en la misma Francia y no existe en los países más adelantados y florecientes hoy, como los anglosajones. Desea Ecclesia que los institutos oficiales estén bien instalados, sus profesores decorosamente retribuidos, no pretende el monopolio de los colegios de la Iglesia, pero es contraria a la dictadura estatal, muy contraria a la justa y honesta libertad de enseñanza y al progreso de la Enseñanza Media.

La ley de Bases de 1938 representó para Ecclesia un gran avance en la cultura religiosa de la juventud contra el laicismo de la República y la cultura religiosa, minimizada en la Enseñanza Media antes de la República; también un grande avance en la libertad de la enseñanza no estatal y aun merece elogios por su tendencia humanística. Por ello no pidió nunca Ecclesia la derogación de tal ley. Mas no tuvo tampoco nunca un fetichismo exagerado por la misma por dos razones.

La principal deficiencia de la ley de Bases de 1938 es la absoluta ausencia del reconocimiento de los derechos de la Iglesia. No los menciona en absoluto, y dividiendo los establecimientos de Enseñanza Media en la base primera en establecimientos oficiales y colegios particulares incluye implícitamente entre éstos a los colegios de la Iglesia. Ahora bien, el gran maestro de canonistas de la edad contemporánea, que luego fué propósito general de la Compañía de Jesús, padre Francisco Javier Wernz, enseña en su inclita obra «Ius Decretalium» cuán ineptamente se adscriben las escuelas de la Iglesia a las escuelas privadas, como si la Iglesia no fuese sociedad perfecta. Por ello la Conferencia de Metropolitanos, en su reciente instrucción sobre el apostolado de la educación y los derechos en ella de la Iglesia, ha creído necesario recordar que «las escuelas de la Iglesia, en cualquier grado, no pueden ser consideradas como escuelas privadas».

En segundo lugar, la ley de Bases de 1938 calla completamente respecto de los derechos de la Iglesia en la enseñanza, y, sin embargo, éste es el único fundamento sólido para que sus colegios puedan desenvolverse debidamente. No negamos que en un régimen de absoluta liber-

tad de enseñanza, que siempre trae consigo la nefasta libertad para escuelas neutras y laicas, puedan también vivir las escuelas de la Iglesia. Mas demostraría una ausencia de sentido canónico el considerar como mera literatura jurídica el aplicar a la importantísima materia de la educación y de la enseñanza las bases de un Estado confesional y aun de unidad católica.

Ni creemos que por ninguno de los que defendemos para España esta unidad y el régimen no de confusión, pero sí de cooperación entre la Iglesia y el Estado, pueda defenderse en la materia escolar como preferible el que en las leyes se establezca la absoluta libertad de enseñanza sin hacer mención de los derechos de la Iglesia para que no sean éstos interpretados como privilegios, pues no se trata de que pida la Iglesia privilegios para sus escuelas, sino de que se le reconozca a ella como sociedad perfecta y con derecho propio a tener sus escuelas. Este reconocimiento es la base del compromiso adquirido por el Estado español en anteriores convenios con la Santa Sede de no legislar sin ponerse de acuerdo con la misma en materias mixtas o que de algún modo puedan interesar a la Iglesia. Esta ha sido la base sólida para lograr con eficacia cuanto en la nueva ley se ha logrado, que no es todo, porque en toda amistosa negociación hay mutuas concesiones. Mas tenemos como segurísimo que muchísimo menos se habría logrado con solos artículos de diarios o revistas y muchísimo menos con campañas de tonos violentos, para las cuales, por otra parte, no había motivo.

La nueva ley de Ordenación de la Enseñanza Media no es sólo una ley o un convenio para los colegios de la Iglesia. Muchos artículos de la misma no afectan a los derechos de la Iglesia; otros afectan sólo al profesorado oficial. Claramente dijo la Conferencia de Metropolitanos en su instrucción que en ellos la misma se inhibía y citaba nominalmente los artículos sobre los cuales había habido negociaciones y, finalmente, acuerdo. Tienen importancia las cuestiones pedagógicas y metodológicas y conviene que ellas sean tratadas competentemente por profesionales. Lo que hay que evitar es confundir opiniones defendibles y respetables con doctrinas de la Iglesia. Por ello ésta no se ha inmiscuído en cuestiones opinables, como en la unicidad del Bachillerato o su división en grado elemental y superior, en los años de duración de uno y otro, en la completa separación de la función docente y examinadora, que, por otra parte, ella no ha aplicado en sus seminarios y universidades pontificias. De lo único que se han ocupado la Santa Sede y la Conferencia de Metropolitanos ha sido de salvaguardar los derechos de la Iglesia y la necesaria libertad de sus colegios, coordinándolo con los derechos del Estado que también los tiene en la enseñanza. *Iuventutis educatio est quidem ex iis rebus quae ad Ecclesiam Statumque pertinent, quamquam aliter, atque aliter, afirmó León XIII en su encíclica "Inmortale Dei" y reafirmó Pío XI en la "Di-*

vini illius Magistri". Por ello creemos que por algunos se ha enfocado mal lo que debía tratarse entre la iglesia y el Estado español al dictar una nueva ley de Enseñanza Media, cual si fuese una cuestión que debiese tratarse entre técnicos y pedagogos especialistas, cuando era una cuestión canónica de relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Para enjuiciar debidamente un estudio comparativo entre la ley de 1938 y la que acaba de promulgarse deben cotejarse serenamente los artículos de una y otra. No habían faltado personas doctas que hubiesen estudiado bien la ley de 1938 y que reconocían que, habiendo constituido un gran avance en el camino de la libertad de enseñanza, no era, sin embargo, ni mucho menos, de completa libertad. Mas no eran pocos quienes, sin un estudio directo y objetivo de la ley y ante la intangibilidad, si no total, sustancial de la ley de 1938, defendida por personas doctas y respetables, consideraban la ley de 1938, en gran parte inaplicada, como una ley poco menos que de absoluta libertad de enseñanza. Por ello Ecclesia, ante tamaña desorientación, se limitó, al ser enviado el proyecto de la nueva ley a las Cortes, a publicar a dos columnas los artículos que se referían a la exigencia de títulos, a las enseñanzas, cuestionarios y métodos docentes que en cada materia deben seguirse, a la inspección de las escuelas, a la obligación de un tanto por ciento de plazas gratuitas, etc. La base primera de la ley de 1938, al dividir los centros de enseñanza y definirlos, dice textualmente: «El bachillerato podrá ser cursado en establecimientos oficiales o en colegios particulares (entre los cuales dicha ley colocaba a los de la Iglesia) debidamente autorizados e intervenidos por el Ministerio de Educación Nacional.» En cuanto a la exigencia de títulos, la base XV exigía como *mínimum* siete profesores titulados en cualquier colegio y se debía mejorar el número de titulados hasta conseguir la equivalencia con la enseñanza oficial. La base XI establecía la inspección en todos los establecimientos, tanto oficiales como privados. Esta no se cumplió, pero el examen comparativo de las leyes ha de hacerse teniendo en cuenta lo que ellas disponen, no su cumplimiento o incumplimiento. Como la ley de 1938 en todos sus artículos considera los colegios de la Iglesia implícitamente como colegios de enseñanza privada, es fácil colegir los muy graves peligros a que según el texto de la ley de 1938 estaban expuestos los colegios de la Iglesia. En la nueva ley de Ordenación de Enseñanza Media, el número de títulos que se exigen se proporcióna a la categoría y al número de alumnos del colegio, comenzando por exigir a los colegios elementales autorizados hasta cincuenta alumnos el *mínimum* de un licenciado en Filosofía y Letras y otro en Ciencias, y el *máximum* en los colegios reconocidos, cualquiera que sea el número de alumnos, de cinco licenciados en Filosofía y Letras y tres en Ciencias. Según el número de alumnos se exigen sobre los profes-

res titulares profesores auxiliares, pero éstos pueden ser quienes tengan estudios completos de la carrera sacerdotal cursados en seminarios diocesanos o equivalentes en casas religiosas de formación.

En cuanto a la inspección, la nueva ley distingue ya la manera de hacerla en los colegios de la Iglesia, estableciendo: «Artículo 58. Por razón de la materia, inspeccionarán en todos los centros de Enseñanza Media: a), el Estado, todo lo relativo a la formación del espíritu nacional, educación física, orden público, sanidad e higiene y el cumplimiento de las condiciones legales establecidas para el reconocimiento o autorización de cada centro; y b), la Iglesia, todo lo concerniente a la enseñanza de la religión, a la ortodoxia de las doctrinas y a la moralidad de las costumbres. Artículo 59. En los centros oficiales y en los de patronato y privados, la inspección del Estado comprenderá también todos los demás aspectos del funcionamiento académico y pedagógico. En los centros docentes de la Iglesia la inspección sobre estos aspectos será ejercida por inspectores designados por la Jerarquía eclesiástica, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, quienes aplicarán las normas dadas por el Estado con carácter general e informarán del resultado de aquélla a la Jerarquía eclesiástica y al Ministerio de Educación Nacional.»

Es ciertamente curioso que, tanto los más apasionados adversarios de la ley de Bases de 1938 como los más entusiastas defensores de su conservación sustancial, hayan coincidido en atribuir el gran número de alumnos que de hecho tienen hoy en España los colegios de la Iglesia a la ley de 1938. No negamos que, sobre todo tal como se ha aplicado, haya tenido su parte en ello. Mas teniendo, como tenemos, a la vista no sólo la estadística del número de alumnos en los colegios de segunda enseñanza de los religiosos en España, sino también la estadística del número actual de seminaristas en los seminarios españoles y de novicios en los noviciados religiosos, del resultado espléndido de las colectas en el Día del Seminario y en el Día de las Misiones, de la multiplicación del número de bulas que hoy se toman en España, no podemos atribuir como causa principal del número de alumnos que hoy tienen los colegios de los religiosos a la ley de Bases de 1938, Ecclesia es contraria a la dictadura estatal sobre todos los colegios de segunda enseñanza, pero creo sinceramente que aun sin la ley de 1938 estarían hoy repletos los colegios de Enseñanza Media de los religiosos, siendo su causa principal el clima de altura propicio a la vida cristiana que se vive hoy en España, de que tan elocuentemente el señor Cardenal Cicognani, que tanto conoce el estado de nuestra Patria, habló el día en que le fué impuesta la birreta cardenalicia por el Jefe del Estado. Los padres, hoy como ayer, y también lo harán mañana, al elegir colegio para sus hijos se fijan, mucho más que en las leyes sobre instrucción, que muchas veces ni co-

nocen, en la confianza que el colegio les merece para la educación moral y religiosa de sus hijos y de sus hijas, supuesta, claro está, la debida capacidad instructiva. Por ello no creemos que los padres españoles retiren a sus hijos o a sus hijas de los colegios de la Iglesia por la promulgación de la nueva ley de Ordenación de la Enseñanza Media. Para algunos polemistas lo más esencial de la ley de 1938 era el examen de Estado por profesores de universidad. Es ciertamente sistema que garantiza la paridad en los exámenes de todos los alumnos oficiales y no oficiales del Bachillerato; pero, sin embargo, es discutido que sea el procedimiento más adecuado para los alumnos de Enseñanza Media.

Es muy de notar que en España la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia en la Asamblea celebrada en 1951 propugnaba no la continuación del examen de Estado por los profesores de Universidad, sino por un tribunal mixto; y aun en una revista publicada por un instituto religioso docente se ha sostenido también que para los alumnos del Bachillerato no eran los examinadores más adecuados los catedráticos de Universidad. Por otra parte, en España éstos rechazan esta misión, y al presentarse el proyecto de la nueva ley en las Cortes han insistido y han logrado que por la ponencia y, al fin, en la ley se les exonerara al menos de intervenir en los exámenes de Bachillerato de grado elemental. Lo esencial que ha propugnado la Conferencia de Metropolitanos es que, al menos para los colegios reconocidos de la Iglesia, haya paridad en la constitución de los tribunales con los institutos oficiales, y esto se ha logrado.

No creemos que la nueva ley aprobada y promulgada sea inmejorable. Es más, esperamos que en algunos puntos de los derechos de la Iglesia sea mejorada ya por disposiciones meramente civiles en el orden económico, ya en el futuro concordato que está negociando el Gobierno con la Iglesia. Mas creemos que ella ofrece un desenvolvimiento digno a los colegios de Enseñanza Media de la Iglesia, que hoy en España, aun habiéndose fundado recientemente algunos colegios episcopales, renovando antiguas tradiciones, son, en su máxima parte, dirigidos por beneméritos institutos religiosos docentes, cuya grande utilidad para el Estado hizo resaltar la instrucción de la Conferencia de Metropolitanos. Esta ha procurado con infatigable celo, con la firmeza debida y con la cordial comprensión necesaria para la eficacia de negociaciones que en lo que a derechos de la Iglesia se refiere (no a cuestiones o procedimientos discutibles) no hubiese un retroceso respecto de la anterior ley de 1938, antes al contrario, una consolidación jurídica que era de todo punto necesaria y aun una ampliación en no pocos aspectos.

Esperamos que los colegios de la Iglesia tengan cada día un afianzamiento y un perfeccionamiento mayor, como ella, su madre y su tu-

tela, desea. Que todos cuantos puedan se pongan en condiciones de ser colegios reconocidos, ya que los simplemente autorizados están en un grado de inferioridad, como legalmente lo estaban según la ley de 1938. Que si en algunos lugares no es posible establecer un verdadero colegio de Enseñanza Media, no dejen de utilizarse las residencias que la ley autoriza y que pueden prestar no pequeños servicios educativos. Que tanto en éstos como en la capacitación instructiva se procure cada día un mayor perfeccionamiento, como la Iglesia jerárquica de-

sea, la cual se preocupa de facilitar centros de formación aun para las religiosas docentes, como tienen en Italia, bajo la mirada paternal de la Santa Sede.

Ecclesia, en su editorial del 8 de diciembre de 1951, hacía también votos para una cooperación común de todos: Iglesia, Estado, padres de familia y profesores o educadores, sin antagonismos entre estos últimos. Los mismos votos hace hoy al ser ya un hecho la promulgación de la nueva ley de Ordenación de la Enseñanza Media.

CARTA DE DON JOSE PEMARTIN

Sr. Director de la revista Ecclesia.

E./E.

Muy señor mío:

En el número de esa revista del sábado 6 del corriente leo un editorial que dedica a la alabanza de la ley reciente de Ordenación de la Enseñanza Media. Para mejor realzar la nueva ley establece una comparación con la ley de 1938; y en esta comparación trata a esta última con una animosidad contraria que, a mi juicio, excede los límites de la justicia y de la objetividad. Como fui coautor de dicha ley —en cuya redacción puse todo mi fervor de católico y mi amor a la auténtica cultura tradicional de España—, me creo en la obligación y con el derecho de defenderla, pidiéndole la inserción de estas líneas en esa revista.

Se sostiene en el editorial que en la nueva ley se reconocen los derechos de la Iglesia en materia de enseñanza, mientras que en la anterior ni se les menciona siquiera; esto es cierto. Pero mientras que en la ley del 38, sin nombrarlos «de jure», se otorgaba “de hecho” a los colegios de la Iglesia una independencia y autonomía tales que ha merecido aquélla la entusiasta aprobación de la totalidad de estos colegios, en la nueva ley se aumenta el intervencionismo estatal de tal modo que ha merecido, por el contrario, la repulsa unánime de todos los colegios de la Iglesia, que son, en fin de cuentas, «los que saben donde les aprieta el zapato»; perdónese la trivialidad del símil.

Ese exceso de intervencionismo estatal se produce:

1.º En el procedimiento de exámenes en los colegios «reconocidos», en los que, bajo la ficción de «inspectores», intervendrán examinadores procedentes del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Media, volviéndose así a la sumisión de los tiempos liberales de la enseñanza de los colegios de la Iglesia a la de los establecimientos del Estado del mismo grado.

2.º Este intervencionismo se aumentará en relación con los colegios «autorizados», que deberán someter a sus alumnos, totalmente, al examen de los catedráticos de igual grado del Estado.

3.º Las condiciones de reconocimiento legal de los colegios serán tales, que numerosísimos colegios de religiosas, y los de los beneméritos Hermanos de la doctrina, por ejemplo, se verán postergados bajo la nueva ley.

No es menos perjudicial ésta, aun reconociéndole varios aciertos, en cuanto a su orientación pedagógica general. Puesto que da opción a los estudiantes científicos, que son los que más lo necesitan, a apartarse prematuramente de la formación clásica y humanística, base de toda sólida formación intelectual cristiana y tradicionalmente española.

También se puede hacer el reparo gravísimo a la nueva ley de la implantación obligatoria, aun en contra de la voluntad de los padres de los alumnos, de una enseñanza política que se denomina «espíritu nacional».

Pero concretándose al punto principal de su editorial, puede decirse que el «estatismo» es mucho mayor en la nueva ley que en la de 1938, a pesar de la solemnidad con que se proclaman los derechos de la Iglesia que se reconocen teóricamente en conjunto, pero que se vulneran prácticamente en detalle. Hay un precedente. En la ley de Ordenación Universitaria también se reconocen los derechos de la Iglesia a tener Universidades propias, con toda solemnidad. Pero aunque desde 1946 se viene trabajando intensamente para obtenerlas, no se consigue. Una cosa es el reconocimiento nominal de los derechos, y otra su ejercicio de hecho; éste se permitía plenamente en la ley del 38; y se obstaculiza gravemente en la actual, según el sentir de los principales interesados, los colegios todos de las Ordenes enseñantes.

Ve usted, señor director, que no es un «fetichismo», como usted dice en su artículo, lo que hace a muchos defender la ley de 1938. Se basa esa preferencia en razones potentísimas, que como coautor de aquella ley me he permitido exponer, deseando con ello informar con plena ecuanimidad a la opinión católica de España.

Muy agradecido, queda de usted afectísimo servidor y amigo q. b. s. m.—Firmado: José Pemartín.

15 de marzo de 1953.

NOTA DE LA REDACCION

Por el hecho de ser coautor de la ley de Enseñanza Media de 1938 el insigne patricio católico don José Pemartín, que en la fecha de su promulgación era director general de Enseñanza Media, no hemos tenido dificultad en publicar la carta que antecede. Comprendemos que el ilustre comunicante experimente sentimiento al ver sustituida por otra una ley en cuya elaboración había tenido tan activa e ilustrada parte. Lamentamos, no obstante, que su estado de ánimo le haya hecho considerar nuestro editorial del 7 del corriente como lo que ciertamente no es: dedicado a la alabanza de la ley reciente de la Ordenación de la Enseñanza Media y con animosidad contra la ley de 1938. Lo que más precisamente procuramos en nuestro editorial fué la serenidad y la objetividad. De la nueva ley dice que no es inmejorable y que espera que en algunos aspectos se mejore. De la ley de 1938 dice textualmente el editorial: «La ley de Bases de 1938 representó para Ecclesia un gran avance en la cultura religiosa de la juventud contra el laicismo de la República y la cultura religiosa minimizada en la Enseñanza Media antes de la República; también un grande avance en la libertad de la enseñanza no estatal y aun merece elogios por su tendencia humanística. Por ello, no pidió nunca Ecclesia la derogación de tal ley.» No entendemos que sea conciliable el reconocimiento de tales méritos con una animosidad contra la ley. Señala, sí, el editorial dos deficiencias, que no puede negar ni niega don José Pemartín: que en la ley de 1938 se clasifica la enseñanza de los centros de la Iglesia como privada y no se reconocen en ella los derechos específicos de la Iglesia en la enseñanza. Lo reconoce nuestro ilustre comunicante, pero dice que la ley del 38, sin nombrarles de jure, los otorgaba de hecho. Nosotros seguimos viendo claramente que el texto de la ley no los reconocía; lo que sí admitimos es que de hecho, por no haberse practicado la inspección del Estado que la ley ordenaba igualmente para los centros de la Iglesia que para los meramente privados y por no haberse urgido en la práctica ni a unos ni a otros el número de títulos que la ley prescribía, de hecho han gozado casi de plena libertad estos últimos años tanto los centros de la Iglesia como los privados. Pero esta libertad, en cuanto a tan importantes puntos, se ha disfrutado no por la ley, sino por su inaplicación e incumplimiento y estaba siempre pendiente de la voluntad personal del ministro y del director general de Enseñanza Media. Si se hubiese urgido la ley, creemos que en no pocos los entusiasmos por la misma habrían decrecido notablemente y que no se habría llegado por nadie al

fetichismo por la ley, que no consiste en reconocer lo mucho bueno que encierra la ley del 38, sino en creer falsamente que, excepto en el examen del Bachillerato, suprimía toda intervención del Estado y en absoluto la necesidad de títulos. Ecclesia sabe bien cuán recta intención guió a los redactores de la ley de 1938; es más, espontáneamente reconoce que en la fecha de 1938, cuando el Gobierno nacional no ocupaba todavía ni la capital ni la mitad de España, cuando antes de terminada la batalla del Ebro no estaba todavía bien decidida su victoria, cuando por fin no se había firmado ningún convenio entre la Iglesia y el nuevo Estado que obligase a éste a no legislar en materias mixtas sin ponerse de acuerdo con la misma, era difícil el reconocimiento expreso de los derechos de la Iglesia, que, en cambio, hoy podían y debían exigir la Santa Sede y los que en su representación negociaron con el Gobierno. Esta ha sido la actitud de la Iglesia al redactarse en 1945 la ley de la Enseñanza Primaria, que ha sido grandemente beneficiosa para promover la instrucción de la niñez y para los centros de la Iglesia de este grado y también al redactarse la ley de enseñanza universitaria a que alude don José Pemartín, quien, sin embargo, dice que en este grado ha sido un reconocimiento nominal sin realidad efectiva. Esta, ciertamente, no se ha logrado todavía, pero esperamos que en una u otra forma se logre, y no sabe Ecclesia que hasta ahora haya sido rechazado por el Gobierno ningún proyecto estructurado y presentado por la Jerarquía eclesiástica.

De los puntos puramente pedagógicos a algunos de los cuales alude don José Pemartín, combatiendo la nueva ley, se ha inhibido siempre Ecclesia, que por ello mismo no puede ser considerada como defensora y apologista de la nueva ley; como por la misma razón no puede ser considerada opuesta a disposiciones pedagógicas de la ley del 38, por haber declarado que eran materia discutible y no doctrina de la Iglesia. Nuestra revista, siguiendo en esta cuestión la misma norma que tiene en todas, procura no ir más allá ni menos que la Iglesia jerárquica y ser fiel eco de la misma, sin que por ello condene que otras revistas traten y discutan cuestiones disputables.

Tres puntos trata don José Pemartín que rozan ya con los derechos de la Iglesia. Esta tiene derecho a paridad de derechos con los institutos del Estado en cuanto a la colación de grados. La nueva ley establece la misma formación de tribunales para los grados en los institutos del Estado y en los colegios reconocidos de la Iglesia. Nuestro comunicante cree, sin embargo, que se ha roto la paridad por formar

parte del tribunal, tanto del grado superior como del elemental, inspectores oficiales de Enseñanza Media, y llega a deducir que ya con sólo esto se vuelve a la sumisión de los tiempos liberales de la enseñanza de los colegios de la Iglesia a la de los establecimientos del Estado del mismo grado. Tamaña deducción nos parece excesivamente exagerada por obvias razones. Primero, el señor Pemartín da por cierto que los inspectores procederán del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Media; mientras que el art. 61 de la nueva ley dice sólo que serán funcionarios de cuerpos docentes del Ministerio de Educación Nacional. Segundo, el art. 64 establece que el cargo de inspector es compatible con el ejercicio de la función docente de la Enseñanza Media. Tercero, para el grado superior, los inspectores oficiales que pueden formar parte del tribunal tan sólo dos y los votantes con ellos son seis, siendo los otros cuatro el presidente, que ha de ser catedrático de la Universidad; dos profesores del centro y el profesor de Religión del mismo. La constitución del tribunal es igual para el grado elemental, con la única diferencia que para este grado podrá el Ministerio sustituir en la presidencia al catedrático de Universidad por un inspector oficial de Enseñanza Media. Cualquiera puede y debe ver qué inmensa diferencia hay entre estos tribunales y los que funcionaban antes de la ley de 1938 y que realmente sujetaban los colegios de la Iglesia a los institutos del Estado.

Otro punto que roza con los derechos de la Iglesia es la situación realmente inferior en que quedan todos los colegios simplemente autorizados. Pero esta situación la tenían también con la ley de 1938, sin que nunca llegase a promulgarse un estatuto especial para tales colegios. Por otra parte, hay que advertir que mientras en la ley del 38 se les exigía el mínimo de títulos que a todos los colegios, o sea siete, en la nueva ley se gradúa el número de títulos según la clasificación de los colegios y número de alumnos, no exigiendo a los colegios autoriza-

dos de un corto número de alumnos más que dos títulos: uno de filosofía y letras y otro de ciencias.

El tercer punto que roza con los derechos de la Iglesia es la cuestión que sugiere el ilustre comunicante, un reparo que juzga gravísimo contra la nueva ley, o sea las enseñanzas de formación política, que estando vigente la ley del 38 se introdujeron ya; pero no sabemos si se ha fijado nuestro ilustre comunicante que en los últimos retoques pedidos por la Conferencia de Metropolitanos y aceptados por la ponencia y la Comisión de Enseñanza de las Cortes, y por tanto en el texto definitivo del art. 34, se establece: «Para las enseñanzas de formación política y educación física, y en los centros de carácter femenino para las enseñanzas del hogar, el Centro deberá contar con los profesores especiales que determine el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la jerarquía del Movimiento y además con la autoridad eclesiástica, si se trata de colegios de la Iglesia.»

Desearíamos que el ilustre ex director general de Enseñanza Media reconociera que por parte de Ecclesia no hay ninguna animosidad contra la ley de Bases de 1938, cuyos méritos ha reconocido en el editorial de 7 de marzo; y que respecto de la nueva ley no tiene tampoco ningún fetichismo exagerado, sino que se contenta con afirmar que, después de las numerosas e importantísimas modificaciones y mejoras logradas por la Conferencia de Metropolitanos, ofrece un desenvolvimiento digno a los colegios de Enseñanza Media de la Iglesia. Sin ello no se habría llegado a su aceptación ni por la Conferencia de Metropolitanos en su dictamen, ni definitivamente por la Santa Sede. Este es, ni más ni menos, el sentido de nuestro editorial de 7 de marzo.

Si nos hemos honrado con este amistoso diálogo con el ilustre coautor de la ley de 1938, de la cual quedan aún algunas benéficas disposiciones en la nueva ley, debemos advertir que no entraría en nuestras normas proseguir discusiones sobre un tema que creemos ya agotado.